ASESORÍAS EN REPARTICIONES GUBERNAMENTALES

Sesión 6ª, celebrada en miércoles 31 de octubre de 2007,
de 11.04 a 13.11 horas.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Preside el diputado señor Marcelo Díaz.

Asisten los diputados señores Sergio Bobadilla, Guillermo Ceroni, Eduardo Díaz, Marcos Espinosa, Fulvio Rossi, Jorge Sabag, Roberto Sepúlveda y Felipe Ward.

Además, concurren como invitados el director nacional de Gendarmería, señor Alejandro Jiménez y el ex director nacional de la referida institución, señor Isidro Solís.

TEXTO DEL DEBATE

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

El acta de la sesión 5ª queda aprobada por no haber sido objeto de observaciones.

El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor MALAGAMBA (Secretario) da lectura a la Cuenta.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para dejar constancia de que vamos a proceder tal como el Consejo de Defensa del Estado lo solicita?

Acordado.

Enviaremos un oficio comunicándole que así se hará.

En esta sesión corresponde recibir a dos invitados, al director nacional de Gendarmería, señor Alejandro Jiménez y al señor Isidro Solís, ex director nacional de la citada institución.

Señor Secretario, por favor, que ingrese don Isidro Solís.

-Ingresa el señor Isidro Solís.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- En nombre de la Comisión, les agradezco su concurrencia.

Para nosotros es muy importante conocer la opinión de todas las personas que han ocupado las más altas responsabilidades en Gendarmería de Chile.

El objetivo de la Comisión es indagar las presuntas irregularidades en las contrataciones, a nivel de asesorías, en distintas reparticiones gubernamentales, pero con especial énfasis en Gendarmería.

El señor Solís fue director nacional de Gendarmería y, además, ministro de Justicia, ministerio del cual depende esa institución. Por lo tanto, su testimonio tiene alta importancia para los objetivos de la Comisión.

Tiene la palabra.

El señor SOLÍS.- Señor Presidente, preferiría directamente contestar sus preguntas. Siento que el tema de irregularidades me es relativamente ajeno. Personalmente, no conozco ninguna, pero estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que me quieran hacer.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Entonces, comenzaré por la primera.

¿En qué período fue director de Gendarmería?

El señor SOLÍS.- Señor Presidente, si mal no recuerdo, fue desde diciembre de 1990 hasta septiembre u octubre de 1993.

El señor CERONI.- Señor Presidente, tal como usted lo señaló, estamos investigando personas que hubieran sido contratadas a honorarios en distintos servicios públicos y que no hubieran efectuado los trabajos correspondientes.

La primera pregunta que quiero hacer al señor Solís es si bajo su mandato, como director de Gendarmería, hubo personas contratadas a honorarios con el objeto de prestar asesorías al director nacional.

De ser afirmativa su respuesta, quiero saber qué tipo de asesorías fueron.

Asimismo, si se hicieron los informes trimestrales que están obligados a realizar luego de terminar la asesoría.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Isidro Solís.

El señor SOLÍS.- Señor Presidente, Gendarmería era un servicio bastante grande, y hoy lo es mucho más. Recuerdo que en esos momentos había plantas uniformadas, la uno y la dos, con aproximadamente 3.500 funcionarios, 800 ó 900 eran de la planta no uniformada.

Como todo el sector público -característica común de nuestro Estado precario-, muchos de los contratos de honorarios no reúnen las características propias de lo que se define como tal, un contrato para una función que no diga relación con las finalidades del servicio, sino que sea fuera de las finalidades del mismo y de horario continuo. Creo que hoy más del 20, incluso más del 30 por ciento del total de los funcionarios del Estado está a honorarios.

El señor ROSSI.- ¿Cuántos?

El señor SOLÍS.- Más del 20 por ciento de los funcionarios del Estado está a honorarios y cumpliendo, exactamente, las mismas funciones que las personas de planta o a contrata –ese es un tema de precariedad-. Por lo tanto, en Gendarmería debe haber habido muchas personas en esa condición.

Ahora, respondiendo directamente a la pregunta del diputado Ceroni, acerca de personas que hayan cumplido la labor de asesores del director, sólo recuerdo haber tenido dos asesores, don Hugo Espinoza Grimalt y don Roberto “Merson”, quienes trabajaron bajo mi dependencia directa, cumplieron horario completo y se encuentran bajo la calidad de personas que trabajaron permanente en Gendarmería.

La obligación de hacer informes trimestrales la estableció el Ministerio de Hacienda a fines de la década del 90. No recuerdo la fecha exacta. Pero en 1990 no existía.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente, agradezco la presencia de nuestro invitado.

La Alianza tiene ciertas dudas respecto de lo que ocurrió en Gendarmería en períodos posteriores a los que a usted le correspondió la dirección de la institución. No tengo pruebas para acreditar la existencia de irregularidades durante su período, por lo que presumo que no las hubo.

Por esa razón, es que sólo quiero consultar su opinión personal respecto de un tema que se preguntó a cada uno de los ex directores que concurrieron a esta Comisión.

Cuando se dio a conocer a través de los medios de comunicación, hace tres meses, la existencia de eventuales sobresueldos o estructuras de sueldos que complementaba remuneraciones a algunas personas que trabajaban en cargos específicos del Ministerio de Justicia, uno de los presuntamente involucrados fue el senador José Antonio Gómez, quien fue claro en decir que eso obedecía a una estructura de sueldos. En el caso de los jefes de gabinete pertenecientes al Ministerio de Justicia, existía una persona a contrata de dicha Cartera, más una a honorarios de Gendarmería. Se señaló, por los medios de comunicación, que se pudo haber pagado también por el Sename o del Servicio Médico Legal, pero se realizó a través de Gendarmería. Eso para los jefes de gabinete del Ministerio de Justicia.

En la época en que usted estuvo en la institución o en el Ministerio de Justicia, ¿era esa, efectivamente, una estructura de sueldos? ¿Las personas que recibían honorarios de Gendarmería cumplían funciones en la institución?

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Solís.

El señor SOLÍS.- Señor Presidente, nunca cursé un contrato para alguien que desempeñara labores fuera de Gendarmería. No era parte de la política de la institución. Nunca nadie me lo requirió. No existe ningún contrato bajo mi administración de esas características. No tengo ninguna información directa de que eso haya ocurrido.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Sobre la base de lo que ha dicho el diputado Ward y en su condición de ex Ministro de Justicia, que, entiendo, coincidió con el período en que el señor Alfredo Bañados fue director de la institución. Según la información que nos ha proporcionado el Ministerio de Justicia, el señor Bañados, que

entiendo estuvo poco más de un año como director de Gendarmería, suscribió 31 contratos de honorarios. Esto es lo que hasta el momento hemos recibido como información.

¿Respondían algunos de esos contratos a esta estructura de sueldos por él señalada? ¿Tenía usted antecedentes respecto de los contratos que hacía el señor Bañados?

El señor SOLÍS.- Los contratos a honorarios, según normativa vigente del Estado, son visados por los ministros. Por lo tanto, tengo una relación directa. El ministro no decide los contratos, pero sí tiene que visarlos. La visación consiste básicamente en revisar si existen fondos asignados a la partida de honorarios y, en segundo lugar, yo personalmente buscaba una cierta congruencia entre el honorario que se le asignaba a la persona, las funciones que realizaba y lo que pagaba el mercado. Esto era lo que revisábamos en el ministerio, que no apareciera un honorario excesivo, pero era la única revisión que se hacía. Nunca calificamos en el ministerio la necesidad de la persona o el tipo de función, porque eso era una facultad administrativa que ejercía el director.

El señor ESPINOSA (don Marcos).- Entiendo que estos informes tenían que ser evacuados hasta el año 2000 en forma anual y que eran el requisito indispensable para que se generaran las órdenes de pago correspondiente a los distintos asesores de prestadores de servicios que tenía la institución.

¿Está en condiciones de afirmar que efectivamente tuvo conocimiento de esos informes y que fueron leídos y firmados por usted?

El señor SOLÍS.- En primer lugar, los contratos de honorarios se pagan mensualmente y no en forma anual, por lo tanto, no existe ninguna relación entre el pago que se cursa todos los meses y el informe.

Respecto de mi administración, 1990-1993, ese requisito no existía.

El señor ROSSI.- Uno podría deducir de sus palabras que sería imposible que el ministro fiscalizara que las personas contratadas a honorarios -estoy hablando durante su período- hayan desempeñado la función que señalaba el contrato. Por cierto, también imagino que los informes trimestrales, en caso de haberlos, no llegaban al Ministro de Justicia.

El señor SOLÍS.- De hecho, no llegan. Administrativamente, llegan al superior jerárquico, dependiendo de la función que esté desempeñando. Ni siquiera tienen que llegar al jefe de servicio.

En Gendarmería, los dos grandes volúmenes de contratos a honorarios eran arquitectura y servicios de salud. Gendarmería tiene un sistema de salud que presta atención a la población penal y a los funcionarios sobre la base de una glosa de horas médicas que son insuficientes. Por consiguiente, cuando había necesidad de una mayor cantidad de prestaciones de salud y ya no quedaban horas médicas, se recurría a los honorarios.

Pero si se contrata a alguien, por ejemplo, en el policlínico que está adosado a la Escuela de Gendarmería, el informe de la función trimestral llega al director regional no al director nacional ni menos al Ministerio. El ministro no tiene forma de saberlo, a menos que haga una investigación para saber si se está realizando o no la función.

El señor ESPINOSA (don Marcos).- En su calidad de ex Director Nacional de Gendarmería, recuerda grosso modo o en porcentaje, cuál era el monto destinado para la contratación de servicios a honorarios y a contrata.

El señor SOLÍS.- Lo único que le puedo decir es que asumí Gendarmería en 1990, en una de las crisis más grandes que ha tenido el Servicio, puesto que era uno de los más pobres. No recuerdo el monto, pero era muy pequeño. Fui director de un servicio que tenía 5 mil funcionarios y dos asesores.

El señor WARD.- Señor Presidente, entiendo el comentario del diputado Rossi, pero frente a lo mismo -obviamente, concluyendo que un ministro es imposible saber si las funciones, en virtud de contratos a honorarios, se cumplen cuando son ajenas a su ministerio- también es obvio concluir -sé que no ocurrió cuando usted fue ministro de Justicia- que si su jefe de gabinete, en el tiempo en que usted fue ministro de Justicia, hubiera prestado servicios a honorarios a Gendarmería, usted habría sabido, el ministro habría sabido.

El señor SOLÍS.- Señor Presidente, la responsabilidad del ministro respecto de eso es la instrucción que da a los jefes de servicio, y éstos tenían una instrucción perentoria -lo podrán declarar todos los jefes de servicio de Justicia-: no se podían cursar dobles contratos. Ésa es una instrucción que viene desde que se modificó la ley y, por lo tanto, hay una instrucción precisa del Gobierno: nadie puede tener un doble ingreso.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Eso significa que, con posterioridad a la ley, no deben existir dobles contratos.

También decía que, no obstante, no ser responsabilidad del ministro, usted se preocupaba de verificar que hubiese coherencia entre la persona contratada, los servicios requeridos y el monto. ¿Se revisó si las personas tenían requisitos de calificación profesional? Por ejemplo, titulación. ¿Lo hacía usted mismo o mandataba a alguien?

El señor SOLÍS.- Señor Presidente, la revisión la hacía personalmente. Cumplí mis obligaciones integralmente frente a la ley, que dice que quien debe visar es el ministro. De hecho, recuerdo haber reparado y devuelto sin visar dos o tres contratos, porque los honorarios me parecieron excesivos. Ahora la calificación es difícil, porque Gendarmería es un servicio muy particular. Hay delegados de libertad vigilada, cuya función no está establecida en los requisitos y, además, su remuneración es bastante baja.

Ahora, si alguien me dijera cuál es el delegado de libertad vigilada ideal, diría que oscila entre un psicólogo y un terapeuta ocupacional; pero como se les paga 300 mil pesos es difícil encontrar cualquiera de esos tipos de trabajadores. Por lo tanto, los delegados de libertad vigilada normalmente es gente de mercados laborales de rentas bajas. Como hay muchos profesores, son contratos bastante modestos.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Lo pregunto, porque revisando contratos de 2006, período en que usted es ministro de Justicia, aparecen contratos por montos significativos: sobre 2.300.000 mil pesos a un asesor jurídico; sobre 3 millones y medio entre el 24 de julio y el 31 de diciembre a un egresado de derecho; 10 millones de pesos a una secretaria Ejecutiva y a otro egresado de derecho por casi 9 millones de pesos. Así, varios casos donde pareciera ser que no hay mucha coherencia entre su calificación profesional y la función que se le señala.

El señor SOLÍS.- Señor Presidente, varios de ellos los puedo aclarar de inmediato. Por ejemplo, el de la secretaria ejecutiva. Como el Ministerio de Justicia no tenía ni glosa ni fondo, pagaba el sueldo de la secretaria del ministro, secretaria ejecutiva de alta calificación que, entre otras cosas, es bilingüe. Era mi propia secretaria que cumplía

una jornada más que completa en el Ministerio, no es una secretaria de Gendarmería. Además, está dentro de la estructura de lo que se le paga a todas las secretarías de los ministros, hay una estructura de sueldos.

En ese sentido, siempre hacía el ejercicio de nunca mirar el contrato anual, siempre hacía el desglose e iba a la renta mensual. Soy abogado y un contrato anual de tres millones de pesos lo encuentro miserable, ya que son 250 mil pesos mensuales.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, con el objeto de que quede constancia en acta, ya que se mencionó que como director nacional el señor Isidro Solís tenía a dos asesores, los señores Hugo Espinoza y Roberto "Merson", ¿podría explicar en qué consistían dichas asesorías y la calidad de esas personas?

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Isidro Solís.

El señor SOLÍS.- Señor Presidente, el señor Hugo Espinoza es sociólogo, había trabajado en Gendarmería durante mucho tiempo, era un antiguo funcionario de clasificación criminal en estadística. Además, realizó, entre otras cosas, cursos de especialización en la Anepe, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, en organización de instituciones uniformadas. Como Gendarmería es un servicio mixto, hubo una fuerte discusión acerca de cuáles serían las características de funcionamiento del servicio ya que por la función que cumple y por portar armas de fuego está sujeta a una estructura y disciplina de carácter militar, por lo que tiene una estructura de carrera de promociones, de ascensos, de distribución de personal en el país, de formación de dotaciones dentro de las unidades, etcétera. Por lo tanto, el señor Hugo Espinoza asesoraba al director desde ese punto de vista, ya que hacía los seguimientos de las carreras de los funcionarios uniformados, las propuestas de distribución de las dotaciones, las de asignación de la estructura jerárquica, unidad por unidad, viendo que las personas designadas tuvieran las competencias necesarias para desempeñar los distintos roles y, en general, trabajaba en la asesoría en el manejo de las plantas uniformadas.

Por otra parte, el señor Roberto Nelson hacía todas las asesorías en el trabajo administrativo.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente, quiero comentarle al señor Isidro Solís, en su calidad de ex ministro, que oficiamos al Ministro de Justicia solicitando las auditorías internas de 2000 al 2006, porque algunos miembros de esta Comisión teníamos datos de que podría existir alguna información relevante.

Parte de esa información me llegó la semana antes pasada, porque la solicité antes de la conformación de esta Comisión, y ayer recibí el resto de las auditorías internas del 2004, 2005 y 2006. Lo informo porque, a pesar de no tener el tiempo suficiente para concluir detalladamente respecto de cada uno de los puntos, habíamos redactado un borrador de trabajo, que puse a disposición de la Comisión, en forma reservada y que estuvo cerca de perder su calidad, donde se señala que posiblemente existieran dobles contratos en 2006. Es decir, en Gendarmería existían funcionarios que trabajaban a contrata

y a honorarios, por lo que se hizo la consulta directa al Ministerio de Justicia y entiendo que se consultaría telefónicamente al actual ministro respecto del tema.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Señor diputado, disculpe la interrupción, pero el mismo día, dado que el ministro se encontraba en la Sala de la Cámara de Diputados pues en ese momento se votaba un proyecto relacionado con justicia, le hice presente la petición de la Comisión.

Continúa con el uso de la palabra el diputado Felipe Ward.

El señor WARD.- Respecto del mismo tema y ya no a modo de conclusiones personales estampadas en un borrador, sino que a modo de lo que concluye el entonces jefe de la Unidad de Auditoría Interna de Gendarmería en 2006, que es el actual director, señor Alejandro Jiménez, se detectó que había funcionarios del área de salud, los cuales son funcionarios a contrata de la institución a quienes se les cancelaba una remuneración mensual y, a su vez, se les pagaba a honorarios. En opinión de este equipo fiscalizador –que dirige el actual director- estos contratos a honorarios merecen ciertos reparos, dado que existe habitualidad y duplicidad en las funciones desarrolladas, contrario a lo que establece el artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Ahora bien, dentro de las remuneraciones de 2006, firmado por el mismo señor Alejandro Jiménez Mardones, actual director, le aconseja al departamento de Personal reevaluar la existencia de los funcionarios a contrata y que, además, poseen contratos a honorarios, desarrollando la misma función y en forma habitual, con el objeto de cumplir con la legislación vigente y, a su vez, evitar sanciones por parte de la Contraloría General de la República.

Asumo que para un ministerio o para un ministro es imposible estar al tanto de lo que ocurre en todas las reparticiones e instituciones que dependen de Justicia. Pero ¿recuerda usted que se haya instruido algún sumario respecto de estos temas o que haya habido alguna sanción en relación con la contravención clarísima que hay a la ley, no dicha por mí sino por quien entonces ocupaba el cargo de jefe de auditoría, que hoy es director de Gendarmería?

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Quiero mencionar un solo ejemplo y no voy a dar el nombre del funcionario porque no me parece que sea necesario. Un egresado de derecho tiene un contrato desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, por casi 9 millones de pesos.

El señor CERONI.- ¿Cuánto?

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Casi 9 millones de pesos, desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2006. Es un contrato suscrito por el director Bañados.

Don Isidro, tengo la misma impresión del diputado Ward, a la luz de los antecedentes. Respecto de Gendarmería no hay ningún hecho que a mí me haya llamado particularmente la atención.

Habíamos visto detalles de los contratos que se nos reenviaron a la Comisión desde esa fecha. Por lo tanto, sigo preguntándole en su condición de ex ministro, entendiéndolo que usted no es el jefe del servicio. Pero señala –y me parece del todo razonable, conozco el esfuerzo y la dura tarea que implica ser secretario de un ministro- que

la secretaria del ministro estaba contratada con cargo a recursos de Gendarmería y que tenía, además, un contrato con el Ministerio de Justicia.

El señor SOLÍS.– No.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).– Perdón por la contrapregunta. ¿Eso es regular? ¿El Ministerio no cuenta con los recursos suficientes para ello?

El señor SOLÍS.– No. Tenía dos secretarías. Una que tradicionalmente ha sido la secretaria personal del ministro y otra que ha sido la secretaria de continuidad. A Soraya la conozco desde que era director de Gendarmería en los años 90.

Ahora, usted dice que hubo un informe que se emitió el 2006. Me gustaría saber si es sobre el ejercicio de 2006, del cual me siento responsable. Pero le quiero decir que no tuve ninguna información.

El señor WARD.– Al crearse la auditoría, el examen deberá comprender los contratos a honorarios, suscritos entre los meses de enero a mayo de 2006.

El señor SOLÍS.– A mayo de 2006.

El director fue designado por mí en abril y, por lo tanto, la mayoría venía de antes.

La instrucción que di fue clarísima, de hecho sé que hubo gente a la cual se le caducaron contratos y que, por ese motivo, consideró que no tenía la renta adecuada y renunciaron y se fueron del servicio. Pero esos contratos vienen de la administración anterior.

El señor WARD.– Dentro del mismo informe, en la parte “Honorarios 2006” se señalan las conclusiones generales en un cuadro resumen: “Informe ejecutivo auditoría para envío al Director Nacional”, directamente al señor Alejandro Bañados, si no me equivoco. De enero a mayo de 2006. Se verificó la cancelación de honorarios....

El señor SOLÍS.– No.

Le debe haber llegado a Bañados, pero los contratos son cursados en enero y esos contratos están cursados por el director anterior.

El señor WARD.– Esto le llegó en julio de 2006. Es decir, era la época de Alejandro Bañados.

Se verificó la cancelación de honorarios sin que se encontrara en poder de su departamento de contabilidad y presupuestos la boleta de honorarios del mes cancelado. La paga es sin boleta.

Insisto, como ministro, obviamente, esto estaba a mil kilómetros de distancia, pero, ¿hay un sumario que usted recuerda respecto del tema?

El señor SOLÍS.– Que se me haya informado, no.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).– Convengamos en que no es el ministro de Justicia ni ningún ministro el responsable de ese tipo de gestiones, sino el director del servicio.

El señor WARD.– He tratado de decir lo mismo.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- ¿Alguna otra cosa?

En nombre de la Comisión, le agradezco su concurrencia y colaboración, pues ha sido muy ilustrativo, asimismo su disposición para contestar, incluso, cuestiones que exceden de su competencia en su calidad de ex ministro de Justicia.

El señor SOLÍS.- Señor Presidente, siento gran respeto por la función parlamentaria, de modo que voy a asistir cada vez que me requieran.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Muchas gracias.

Antes de hacer ingresar al señor Alejandro Jiménez, quiero plantear algunas cuestiones.

En primer lugar, que me encontré con la subsecretaria de Justicia y le representé nuevamente la necesidad de que esta Comisión cuente con toda la información existente respecto de nuestra investigación.

En segundo lugar, que la información a la cual hizo referencia el diputado señor Felipe Ward fue remitida a la Comisión por dicha subsecretaria de Justicia, por lo cual hay que manifestar nuestro malestar, por lo menos el de este Presidente, al jefe de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, señor Hernán Ampuero, por no habernos hecho llegar tal información.

Y en tercer lugar, pedir al señor Hernán Ampuero que nos haga llegar toda la información que necesitamos.

Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, concuerdo en que habría que oficiar al jefe de la Oficina de Informaciones y pedir a Secretaría que solicite tal información, por cuanto son antecedentes útiles para nuestra investigación. Mientras la Comisión más se nutra de antecedentes que apoyen la investigación, mejores serán sus resultados.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con hacer dicho requerimiento y plenamente dispuesto para que enviemos el oficio, pero no sé si reglamentariamente se puede hacer, por cuanto el objetivo del envío de un oficio a través de la Oficina de Informaciones es que la autoridad requerida no conozca quién es el peticionario.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Entonces, ¿habría acuerdo para oficiar al jefe de la Oficina de Informaciones?

Acordado.

El señor WARD.- En todo caso, señor Presidente, la información que llegó entre la semana pasada y ayer queda a disposición de la Comisión.

Se suspende la sesión para recibir al invitado.

-Ingresa a la Sala el señor Alejandro Jiménez, director Nacional de Gendarmería de Chile.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Continúa la sesión.

En nombre de la Comisión, agradezco la presencia del director nacional de Gendarmería de Chile, señor Alejandro Jiménez.

Como en una sesión pasada usted ya nos presentó una exposición de los hechos, corresponde que los señores diputados hagan las preguntas que crean necesarias.

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor Alejandro Jiménez.

En segundo lugar, quiero recordar que la vez pasada le hicimos algunas preguntas respecto de los oficios que nos remitió la Subsecretaría de Justicia relacionados con las auditorías internas del período 2000-2003. Había un remanente, que se envió también, del 2004.

Agradezco que hayan remitido asimismo la información que llegó ayer a la Cámara, y a mis manos, respecto del período 2004-2006. A pesar de que no se entregan -no sé si no existen- antecedentes sobre el análisis completo en cada año, sí se proporciona información parcial de cada uno en lo concerniente a honorarios y remuneraciones, en forma separada.

No es un juicio de valor. Simplemente estoy constatando un dato.

Recién estuvimos conversando con el ex ministro y ex director de Gendarmería don Isidro Solís. Le señalé con total claridad que en cuanto a su período no tengo ninguna información ni presunción alguna de irregularidades. Tiendo a presumir lo contrario.

En realidad, fue bastante breve la reunión que sostuvimos con él, por lo menos en lo que atañe a las preguntas que yo formulé. Pero el señor Solís fue categórico en una de sus respuestas al señalar que, cuando ingresó como ministro de Justicia, había instrucciones precisas -alguien me puede corregir si fue distinto lo que dijo- de que no debían existir dobles contratos. Hace un par de sesiones hablamos de la eventualidad de que en Gendarmería hubiera, quizás hasta la fecha, dobles contratos; es decir, una misma persona ejerciendo una sola función dentro de la institución y recibiendo pagos por contrata y por honorarios.

Uno de los ex directores nos señaló en forma categórica que era improbable -no sé si empleó la palabra "imposible"- que eso hubiese ocurrido.

Pero vamos al tema que nos convoca.

Usted conoce mucho mejor que yo la información contenida en las auditorías internas remitidas a la Cámara de Diputados.

No sé si la Comisión quiere que hagamos un resumen o una lectura de los puntos más importantes. Imagino que no.

En todo caso, sólo quiero señalar que aquí no hay año, de 2000 a la fecha, en que no se constaten irregularidades graves respecto del pago de remuneraciones y honorarios.

Todas estas auditorías, por supuesto, están firmadas por usted.

Gendarmería, cuando se inició la discusión sobre la posibilidad de que figuraran en la nómina personas muertas y/o exoneradas, fue categórica en señalar que eso fue un

error que se había producido al levantarse la información a Chile Transparente o a Gobierno Transparente.

Yo recibí el sumario -agradezco su envío a la Comisión-, donde se deja muy claro que efectivamente se produjo un error porque una persona que estaba trabajando o que se hallaba de vacaciones y le pasó la información a otra. O sea, una cuestión administrativa perfectamente explicable. Ahí uno no puede presumir la existencia de ningún acto irregular o de corrupción.

En definitiva, hubo un sumario urgente decretado por la dirección nacional de Gendarmería en relación con este tema, aun cuando ustedes tenían presupuestos de que eso era un error administrativo.

Por otra parte, quiero preguntarle qué tipo de medidas se tomaron respecto de todas y cada una de las irregularidades detectadas por el equipo que usted encabezó – entiendo- desde 2000 hasta 2006 -no sé si antes también- en relación con el pago de remuneraciones y honorarios por la existencia de dobles contratos, por la existencia de sobrepagos a ciertas personas, por la existencia de personas que figuraban en planillas de cheques girados pese a no prestar ninguna función dentro de Gendarmería, sin siquiera ser funcionarias de esa institución; qué tipo de sumarios; cuántos sumarios; qué resultado tuvieron las investigaciones realizadas -espero que se hayan efectuado- a propósito de tales hechos, y -lo que le decía denantes- si efectivamente la Dirección Nacional de Gendarmería sabía de la existencia de dobles contratos.

Don Isidro Solís nos dijo que eso quedó completamente oleado y sacramentado con posterioridad o desde el acuerdo de enero de 2003. Sin embargo, le agregué que el Estatuto Administrativo, en sus artículo 11 y otros, establece la imposibilidad de que aquello ocurra cuando existe habitualidad y duplicidad -no recuerdo exactamente las palabras-.

En definitiva, el juicio de valor que ustedes hacen en estas auditorías internas no deja lugar a la interpretación. Ustedes manifiestan un rechazo de plano. Señalan que esto puede generarles sanciones por parte de la Contraloría. Y eso se sucede desde 2000 hasta 2006. Entiendo que no exactamente con las mismas personas. Pero si la ilegalidad detectada en una auditoría interna no se detiene el año siguiente ni el subsiguiente y se sucede año tras año a vista y paciencia de las autoridades de la Dirección Nacional, tengo pleno derecho a presumir que es compartida por todos.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, ¿podríamos hacer una ronda de preguntas antes de que el señor Jiménez conteste?

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, en esa misma línea, me gustaría que el señor Jiménez precisara si en los sumarios se establecieron irregularidades por dobles contrataciones o por personas contratadas a honorarios para asesorías que no se realizaron o, en definitiva, se estableció que no se hicieron los informes correspondientes de esas asesorías.

Asimismo, me gustaría que aclarara si respecto de todas las personas que han sido nombradas en esta Comisión, como, por ejemplo, las señoras María Adriana Hornkohl y Ana Loreto Ditzel, y los señores Osvaldo Andrade Lara, José Antonio Gómez, Carlos Maldonado Curti, Jorge Correa Sutil y Osvaldo Puccio, le correspondió realizar alguna investigación y finalmente se hubieran establecido hacia ellas algunas irregularidades.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.

El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, tomando en cuenta que el señor Jiménez fue auditor interno de Gendarmería durante un tiempo significativo y que hoy desempeña el cargo de director de dicha institución, debo concluir –puedo estar equivocado- que él es un gran conocedor de lo que sucede, porque desempeñar un cargo como ése lo lleva a involucrarse en las diversas situaciones que se puedan dar desde el punto de vista administrativo en la institución. Hoy, al desempeñar el cargo de director nacional, con mayor razón tiene una visión bastante amplia sobre lo que sucede dentro de Gendarmería.

Entonces, desde la perspectiva del conocimiento que él tiene de la institución y de los informes que se elaboraron, me gustaría que precisara lo siguiente.

Respecto de los contratos a honorarios, en uno de los informes él establece que el 87,75 por ciento de los funcionarios contratados presentan informes trimestrales de las labores que desarrollan. Eso también se establece en 2004, a excepción de algunos casos. O sea, había gente contratada a honorarios que entregaba los informes trimestrales, pero también un 23 por ciento que no los entregaba.

Por lo tanto, me gustaría que el señor Jiménez precisara quiénes eran las personas que no entregaban los informes trimestrales.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado Felipe Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente, como probablemente va a ser difícil que nuestro invitado recuerde a todas las personas que no cumplieron con esa obligación contractual, tengo en mi poder un informe autorizado por el señor Jiménez. Una de las personas que aparece en ese listado de informes trimestrales no presentados es justamente el señor Osvaldo Andrade.

El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, por cierto, el señor Andrade – actual ministro- no es cualquiera persona, es bastante conocido en nuestro país. Por lo tanto, también debo asumir que el señor Jiménez recuerda si dentro de ese porcentaje de personas que no entregaban los informes estaba precisamente el señor Andrade.

Por otra parte, figura en un informe de 2003, que presentó el señor Jiménez - voy a leer textual-, “además en este listado se encuentran 25 casos de funcionarios que actualmente no desarrollan funciones en la institución y aún se encuentran incluidas en dicha planilla (de sueldo).”

¿Quiénes son esas personas que no estaban desempeñando ninguna función y que se encontraban en la planilla de sueldos?

Asumo que se les pagaba la remuneración que figura allí. El diputado Ward señaló que existían cheques girados a nombre de esas personas.

¿Aún se mantienen en Gendarmería las situaciones que detectó en esa época? Asumo que como auditor en el pasado y hoy como director el señor Jiménez debería haber tomado medidas correctivas para que estas irregularidades no se siguieran repitiendo. ¿Qué medidas adoptó? ¿Qué sumarios se llevaron a cabo? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Se siguen produciendo esas situaciones hasta hoy?

El señor JIMÉNEZ.- Respecto del sumario y al levantamiento de la página web donde aparecían algunas personas fallecidas y otras que no estaban prestando servicios a la institución, efectivamente, se establecieron responsabilidades y se aplicaron medidas disciplinarias por parte del fiscal. Eso significó que a mi llegada pedí la remoción del jefe de personal y del jefe del área de planificación, que eran los encargados de subir esta documentación. Reitero: ambos fueron removidos al asumir mi cargo. Hoy, hay otras personas a cargo de solucionar el tema.

El problema también radicaba en el área de desarrollo de la carrera, ya que por falta de personal estaba a cargo de vigilantes o personas que no tenían los estudios suficientes. Por eso, se removió a esa gente y se les reintegró a sus labores propias de vigilancia. Se llamó a un concurso interno que ganó el señor Rodrigo Toro, que pertenecía al área de planificación, profesional que está asumiendo este tema. Además, se incorporó un auditor para profesionalizar el área de desarrollo de la carrera. En Gendarmería tenemos 13 mil funcionarios, por lo que no es un área menor el desarrollo de la carrera. Eso fue lo que se produjo frente al hecho concreto.

Ahora, respecto de la doble contratación que señala el diputado Ward, efectivamente, en 2006 se realizó el informe de auditoría número 30, donde se establecen algunas situaciones. El nombre de las personas aparece en la página 2 del informe y se trata de odontólogos y tres médicos. Efectivamente, hay una doble contratación porque estas personas estaban bajo la modalidad de a contrata y de horas médicas. De acuerdo con lo que se detectó en el informe, ello se debía a que no había médicos que quisieran ser contratados en el sistema penitenciario. Pero debido a la necesidad de contar con médicos para atender en el hospital penitenciario y en las diferentes unidades penales para cumplir con el requerimiento de las atenciones médicas de los internos, se procedió a usar este sistema para aumentar las horas de trabajo -que fue lo que tiene que haber hecho el director de la época-. No obstante esa situación, y la facultad que pudiera tener el director nacional, eso debía ser corregido por cuanto se contraponía con la normativa del estatuto administrativo. Por lo tanto, la doble contratación se produce en esos hechos específicos. No recuerdo haber establecido la existencia de dobles contrataciones en alguna auditoría que no estuviera relacionada con personal del área médica.

En cuanto a los cheques girados por el departamento de Renumeraciones y a que 25 personas habrían recibido sueldo sin haber prestado servicios a Gendarmería, esa preocupación surge a raíz de una auditoría que hicimos a las remuneraciones de personal a contrata, no por honorarios. En auditoría teníamos una línea investigativa referida a honorarios y otra a remuneraciones. Respecto de éstas, lo que se detectó fue lo siguiente:

Los días 15 de cada mes el área de Presupuesto y Contabilidad cierra el sistema de pagos para poder girar los cheques y cancelar las remuneraciones de los funcionarios entre el 20 y el 21. Se cierra el 15 porque, insisto, son 13.000 funcionarios, lo cual hace que el proceso sea bastante largo.

Sucedía que en algunas ocasiones había personal a contrata que dejaba de prestar servicios porque renunciaba o porque se le había puesto término a su contrato. El departamento de Personal informaba todas esas situaciones los días 18 ó 19, lo cual hacía que, como a esa altura ya se encontraba cerrado el proceso de pagos, Remuneraciones girara, en teoría, los cheques y los pagos. Pero en la práctica, como el aviso era dado fuera del período pero antes del pago, esos documentos nunca se pagaron efectivamente.

Presumo que ante esa situación, el director nacional ordenó, tal como hicimos en Auditoría, una mejora en los procedimientos y no que se iniciara un proceso de auditoría, porque en ningún caso se había producido un detrimento en el patrimonio del servicio o del Fisco, ya que nunca se hicieron los pagos, los cuales, en todo caso, quedaron dentro del sistema porque el proceso los había recogido.

Lo que se señaló, y estamos trabajando fuertemente en ello como dirección nacional, es que hay que evitar que se produzcan estos lapsos entre el 15 y el 18, para lo cual es necesario que el departamento de Personal avise oportunamente cuando se produzcan estas renuncias o despidos, y no guardarse la información. Lo que hacía ese departamento es que si había personas que habían cesado el 1, 2 ó 3 de un mes, por ejemplo, avisaba todos los casos en conjunto cerca de la fecha en que debía realizarse el pago.

En consecuencia, hemos establecido que debe darse aviso al área de Remuneraciones inmediatamente acaecido el hecho, para que no se produzca nuevamente este tipo de situaciones.

Pero insisto en que como auditor pude constatar que no se habían hecho pagos efectivos a esas personas. Eso es lo que se refiere a remuneraciones.

En cuanto a que haya habido personas contratadas para prestar ciertos servicios que no hayan presentado los informes respectivos en su momento y que sólo el 87,7 por ciento de esa gente habría presentado informes, la verdad es que tendría que revisar las páginas del trabajo.

En ese contexto, es efectivo que el señor Andrade hoy es ministro del Trabajo, pero en esa época no lo era, y la verdad es que mis funcionarios hacían el trabajo y nosotros revisábamos y chequeábamos el tema. Así es que es probable que él haya sido una de las personas mencionadas en el informe de auditoría, pero necesitaría revisar los trabajos, los cuales no tengo a mano, así es que tendría que pedirselos a Auditoría para que me los hiciera llegar y luego revisar las hojas de trabajo de los funcionarios que hicieron la investigación, a efectos de poder recordar, porque la verdad es que hoy no lo recuerdo.

Ahora, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron? En algunos casos se decretaron auditorías.

El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, ¿me permite una interrupción?

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra señor diputado.

El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, por su intermedio, solicito al señor Jiménez que nos diga si reconoce la autoría de este informe, porque aquí aparece mencionado el señor Andrade. Si no recuerda el caso, tal vez, al ver el documento, pueda recordar.

-El diputado señor Bobadilla hace entrega de un documento al señor Jiménez.

El señor JIMÉNEZ.- Sí, efectivamente, este documento es parte del anexo de los informes de los planes de trabajo de los funcionarios de Auditoría.

Este informe se refiere a una auditoría que se hizo al 90 por ciento de las personas que trabajaban a honorarios. Se utilizó un sistema que opera sobre la base de muestras, no respecto del total de lo que se va a revisar. Se realizó en 2005 y se refiere al proceso que va de enero a junio de ese año, lo cual indicaría que había dos informes pendientes de aquellas personas.

Lo que hemos señalado en reiteradas ocasiones en nuestros informes es que éstos no fueron habidos, no necesariamente que no fueron encontrados, porque, a veces, nos pasa en las auditorías, y en todo tipo de auditorías, que no siempre la persona auditada maneja la documentación en forma ordenada, y cuando vemos o revisamos un período de horas-hombre, que se nos establece por requerimientos del Caigg, se solicita toda la información para que posteriormente sea subsanada.

Ahora, el informe N° 23, que seguramente no tienen los señores diputados, de 30 de junio de 2006, es un seguimiento a las recomendaciones. Aquí quiero hacer un paréntesis. De acuerdo con las últimas indicaciones del Caigg, de 2005, se establece la obligatoriedad de todas las auditorías de Gobierno de hacer dos veces al año un seguimiento de las recomendaciones que Auditoría hubiese ejecutado en el período anterior, lo cual va dentro del PMG de autoría. Y debe hacerse, porque se requiere, además, el acuerdo de las instrucciones del Caigg y de la cantidad de recomendaciones. Por ejemplo, si hay entre 75 y 100 la cantidad de recomendaciones que haya acogido el Servicio tiene que ser cercana al 90 por ciento. Si hay más de 70, tiene que ser del 70 por ciento, etcétera.

Por lo tanto, en ese orden de cosas la Unidad de Auditoría ejecuta al año siguiente dos seguimientos: a mediados de año y a fines de año, para determinar si las recomendaciones formuladas por Auditoría fueron acogidas efectivamente, de lo cual se informa al Caigg.

En 2006, a través del informe N° 23, de junio de ese año, se señala que, mediante el informe 57, de auditoría interna -diciembre de ese año-, que se denomina Informe y Grados de Avances y Recomendaciones, se señala que efectivamente se habrían cumplido y encontrado dichos informes.

Por lo tanto, si la Comisión lo estima pertinente, se pueden solicitar todas las auditorías de seguimientos, en las cuales se va dejando claramente en qué medida se han subsanado dichas recomendaciones.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Me permite una interrupción. Ante su invitación a solicitar esta documentación en su condición de director de Gendarmería, quiero hacer presente que fue solicitado hace rato.

El señor JIMÉNEZ.- Es que estos informes son secretos, pero se los puedo mandar. Son informes a honorarios, son generales.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Nos está diciendo que está en mora.

El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, estamos en mora con tres solicitudes que se refieren a acompañar informes de algunas personas que se nombraron específicamente, y

a la información de la señora Marcia González. Pero, en este caso, estoy ofreciendo las recomendaciones que han sido o no acogidas.

Respecto de los sumarios en general, en el sentido de si se decretaron sumarios o no, en el caso de las remuneraciones de estas veinticuatro personas tengo entendido que no, y presumo que nosotros, como criterio al informar, no solicitamos como Auditoría la ejecución de un sumario, porque efectivamente no se había producido un daño patrimonial al servicio, sino que un problema de procedimiento, en cuanto al aviso oportuno o no de esta información, lo cual no produjo daños. Sin embargo, eso ha ido mejorando con el transcurso del tiempo, y hoy no se nos producen circunstancias de ese tipo, porque hemos logrado mantener un sistema de comunicación dentro del sistema computacional de Gendarmería a fin de dictar una resolución de término de contrato. Es más, presentada la renuncia de parte de la persona contratada o de planta, se le informe directo a Presupuestos para los efectos de que no lo incorpore dentro de las planillas de pago.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, me gustaría saber ¿cuál es la trayectoria, desde el punto de vista legal o administrativo, de los informes que realizan los asesores? ¿Ante quién presentan esos informes? ¿Eso va a la Contraloría o simplemente queda a cargo de la jefatura correspondiente? ¿Cuál es la trayectoria?

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Señor Jiménez, usted señaló que remitió los informes a la subsecretaría. Por lo tanto, debo suponer que existen informes de cumplimiento de contrato.

¿Dónde deben estar archivados y qué valor jurídico le otorgan a los informes? ¿Son un requisito del incumplimiento, son un elemento adjetivo a los contratos? Por ejemplo, en el caso de labores médicas, cuyas prestaciones constituyen el objeto del contrato, la atención dental no es el informe. Sin embargo, otros contratos suponen la preparación de un informe. Tal vez, una asesoría directa que precisamente debe constar en un documento escrito.

El ex ministro Solís dijo expresamente que no existían o no deberían existir dobles contratos desde 2003 a la fecha.

Ante los ejemplos que se le mencionaron, señaló que todos eran previos al período de la asunción del señor Bañados, director a quien nombró o propuso nombrar en dicho cargo. Sin embargo, usted señala que se produce esa situación en el caso de las atenciones médicas o dentales, en el que por imposibilidad de contratar personal externo hubo que recurrir a la figura de añadirle honorarios a personas que ya tenían contrata, no obstante representar una situación irregular, tal como consta en el informe que usted suscribió.

En el período durante el cual ha sido director de Gendarmería y auditor de la misma institución, ¿existen otros casos, que no sean las prestaciones médicas o dentales, en los que se repiten o se presentan dobles contrataciones, bajo régimen de contrata y de honorarios?

Tiene la palabra el señor Alejandro Jiménez.

El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, hasta 1999 el informe era anual y a partir de esa fecha la Dirección instruye que se haga en forma trimestral.

La persona contratada a honorarios se lo presenta a su jefe directo, llámese, en este caso, el director nacional, o a los jefes de unidades penales o de readaptación, en los casos de contrataciones a honorarios para fortalecimiento de las comisiones técnicas de dichas unidades y del área laboral.

El informe se visa y es acompañado dentro de la boleta de honorarios de ese mes, a efecto de que se proceda al pago de la tributación. Es tan así que en uno de los casos establecimos, si no me equivoco, en el del señor Andrade, que de no ser acompañado de los informes, no se procediera al giro del pago.

Por lo tanto, se presume que fue acompañado de los documentos en ese momento.

El señor CERONI.- Señor Presidente, el señor Jiménez dice que es acompañado con la boleta, pero supongo que se le paga mensualmente.

El señor JIMÉNEZ.- Así es, pero se pide que trimestralmente, al momento del pago, se acompañe el informe. El compromiso es trimestral, pero se le paga mensualmente porque no tiene la obligación de hacer el informe.

Posteriormente, el informe es archivado en la base de datos de la unidad de la oficina de informaciones y de la oficina de partes.

En la administración pública, en general, y especialmente en Gendarmería, cada cinco años se elimina gran cantidad de documentación. Por lo tanto, si bien hay algunos informes hay otros no pudieron ser ubicados, porque sobrepasaban los cinco años de resguardo.

El valor jurídico que se le da a ese informe es sólo un medio que tenía la dirección y, fundamentalmente, el director nacional a fin de comprobar el avance en las materias para las que había sido contratada la persona a honorarios. Además, determinar si se encontraba conforme para continuar o no con el contrato o, en su defecto, establecer las medidas correctivas de lo que se buscaba con respecto al informe. Tampoco existía obligación legal alguna a la hora de emitir los informes que perjudicara el cumplimiento o el pago del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en la auditoría dábamos preponderancia al hecho de que los informes fuesen trimestrales, a objeto de que se cumpliera el requerimiento establecido por una instrucción interna de Gendarmería.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Eso no consta en los procedimientos internos, sino que en los contratos.

El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, a partir de una instrucción interna se incorpora a los contratos y se hace obligatorio a objeto de que se presente el informe. Posteriormente, en la auditoría hacemos mención de que en el caso de que dicho informe no se acompañe en el trimestre indicado, no se proceda al giro y pago de los honorarios.

Ahora bien, no tengo conocimiento del motivo de la decisión del director nacional de contratar médicos y odontólogos en doble contratación. Presumo que es debido a la necesidad de contar con sus servicios debido a la falta de profesionales de esas especialidades. Ese motivo hace inevitable su contratación, especialmente cuando hablamos

de gente recluida y privada de libertad y con las que se corre el grave riesgo de motines y situaciones de conflicto por falta de doctores o dentistas. Esas situaciones a la vista de las personas en libertad parecen ínfimas.

Durante mi período no tengo conocimiento de ninguna contratación, incluso en el área médica. Lo que se hizo fue pedir más horas médicas y fue oportunamente aprobado.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.

El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, quiero expresar al señor director que no estoy de acuerdo en lo absoluto con las afirmaciones que ha hecho acerca de que no existe ninguna obligación legal con respecto a que el contratado a honorarios tenga que emitir un informe trimestral.

Tengo a la vista un documento donde consta la obligación contractual del señor Andrade, de los años 2003, 2004 y 2005. En el punto séptimo del acuerdo se expresa claramente que el contratado debe emitir informe trimestral.

Por lo tanto, cuando el señor director dice que no existe la obligación legal de emitir dicho informe, le refuto que no es así.

Que no quede la impresión de que se cumplió con el contrato porque no fue así, eso queda ratificado por los mismos informes que el señor director hizo cuando fue auditor o fiscal interno.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Me permite una precisión. Usted es muy categórico diputado.

El señor Jiménez ha señalado que si los contratos posteriormente se pagaron, él presume que fue porque los informes se presentaron. No sabemos qué contratos son los que cuentan con informes, si los del señor Andrade o del señor Pérez. Esa información todavía no la tenemos.

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.

El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, soy categórico cuando tengo a la vista los contratos.

El señor director ha manifestado que no existía la obligación legal de emitir los informes y le contesto que no es así. La obligación contractual se establece como trimestral.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- El señor Jiménez señaló que no existe la obligación legal y lo que yo digo es que todavía no emitamos juicios respecto de si algún contrato cuenta o no con informe, porque no los hemos recibidos. Cuando los tengamos veremos qué personas citaremos.

El señor ESPINOSA.- Señor Presidente, me gustaría aclarar dos cosas que considero importantes tanto para establecer claramente los informes como el contenido de los informes de auditoría firmados por nuestro invitado y seguramente realizados.

En primer lugar y respecto de esta situación de doble contrato, en 2005, usted dice que se refiere específicamente al caso de médicos y odontólogos, en que el servicio, por obligación, se debe necesariamente suministrar a las personas que están

privadas de libertad. ¿Justifica ello necesariamente que exista o que persista esa modalidad en el caso específico de médicos y odontólogos?

En segundo lugar, no me quedó claro el tema de las 25 personas a las cuales se giró cheques y se pagó por servicios no realizados. Este hecho, a mi juicio, no corresponde a lo que realmente pasó. Según lo manifestado por usted, el personal no fue eficaz ni eficiente para avisar oportunamente a la oficina de remuneraciones, a fin de que se evitara girar esos documentos. Esto tiene que ver exclusivamente con personas que estaban contratadas, no estamos hablando de contrataciones ni servicios, por lo tanto, me gustaría que eso también quedara claramente establecido en el acta.

El señor WARD.- Ocurre que en la información de 2000 a 2006 existe una serie de irregularidades que no sólo tienen que ver con estos casos particulares de doble contrato y de ciento por ciento ilegalidad. Además, hay cosas bastante graves. Se verificó el pago de honorarios sin que se encontrara en poder del departamento de contabilidad y presupuesto la boleta de honorarios. Es decir, se giró un honorario sin boleta contra nada. El departamento de personal, a la fecha de corte de la auditoría, no posee el decreto exento del Ministerio de Justicia que avala la contratación, hecho que le correspondería al señor Osvaldo Andrade.

Si bien el señor Osvaldo Andrade trabajó en Gendarmería, no es dable que exista manga ancha para ciertas contrataciones. Estos hechos acreditan claramente que existe; se detectaron documentos por una suma ascendente a más de 7 millones de pesos, cantidad que corresponde a cheques girados para el pago de honorarios, situación que no correspondía.

Ahora bien, hablamos de más de cuatro personas, por lo tanto, le inquiriré cosas muy concretas. En primer lugar, usted señala que no se iniciaron sumarios o que no recuerda que en todos los casos se había iniciado sumarios, fundamentalmente porque no hubo daño patrimonial para el Fisco.

En el caso del reportaje que hace La Segunda, hace algunos meses, tampoco hubo daño patrimonial para el Fisco, pero de todas formas hubo un sumario con sanciones administrativas contundentes y sumamente claras. En consecuencia, existe una situación que no me cuadra.

En segundo lugar, respecto de lo señalado por el diputado Bobadilla, ¿podría usted concordar con la afirmación que en el caso de que se hubiera pagado a personas que no han entregado los informes trimestrales se estaría frente a una ilegalidad, un incumplimiento de contrato o a una vulneración de éste por parte de la institución? Al respecto suponemos, no tenemos los antecedentes, que quien no emitió informes trimestrales, no recibió remuneración, sea ese mes, en forma retroactiva o trimestral.

Como no tenemos la certeza respecto de ello, si suponemos o presumimos que esto fue así, invito a hacer lo contrario: si se pagó, ¿fue esto una irregularidad o una ilegalidad? ¿Cómo lo calificaría usted?

En tercer lugar, como jefe de la unidad de auditoría interna, ¿tenía alguna atribución distinta a la de detectar irregularidades? Lo consulto porque me complica que éstas se hayan sucedido año a año.

Se han establecido situaciones irregulares que es necesario corregir. Al respecto y haciendo una autocrítica, ¿existía responsabilidad en la unidad que usted dirigía,

en el sentido de evitar que al año siguiente se repitiera la estructura *copy-paste* en algunas situaciones en la auditoría?

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- ¿Existía personal de Gendarmería, en el período en que fue auditor y director, que no prestara servicio en Gendarmería sino en otras dependencias del Ministerio de Justicia?

El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, en el Ministerio de Justicia hay gente destinada de la planta 1, 2 y 3, de contrata y de planta, propiamente tal, y a honorarios no tengo antecedentes hacia atrás que haya habido. Pero me parece que en algunas oportunidades se ha ejecutado así, debido a que han sido trabajos destinados a áreas de Gendarmería. Llámese reforma procesal penal, reforma de adolescentes, en la cual se hicieron algunas prestaciones de trabajos solicitados por el servicio en que trabajaban y también ejecutaban labores con nosotros.

Respecto de la doble contratación de odontólogos –insisto-, en el informe N° 27, de junio de 2007, se hace mención que en el seguimiento de recomendaciones han sido subsanadas estas dobles contrataciones, es decir, fueron acogidas las recomendaciones de auditoría.

En cuanto a la pregunta del señor diputado, quiero expresar que es una autocrítica en general al sistema. Teníamos –todavía sigue funcionando- una reunión mensual de todos los auditores del sistema de justicia y, posteriormente, nos reuníamos con los auditores de otros servicios. Pero la gran problemática que se presenta en las unidades de auditoría es que no pueden hacer más de lo que se establece; sólo se hacen recomendaciones y no se pueden tomar otras medidas por la estructura misma del sistema. De acuerdo con la normativa y con la ley de la Contraloría General de la República se depende técnicamente de ésta, pero, funcionariamente, estamos dentro de cada servicio público. Nuestra obligación, como auditoría, es detectar los errores, hacer las recomendaciones pertinentes para hacer los ajustes y colocarlas en conocimiento de los señores directores de cada servicio. Debo señalar que, no es un tema para salvar ciertas situaciones, dentro del sistema general de la administración pública, Gendarmería ha sido uno de los servicios donde más recomendaciones se han acogido. ¿Cuál es el sistema que hoy se está ocupando? Que estos informes, que tienen los señores diputados y todos los que emanan de auditoría, son enviados mensualmente al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, Caigg, que va haciendo un chequeo de las recomendaciones y, posteriormente, obliga a hacer su seguimiento y a acompañar el seguimiento de éstas, con el objeto de determinar si el servicio acoge o no las recomendaciones de la unidad de auditoría.

¿Cuál es el castigo que procede en caso de que las recomendaciones no sean acogidas en los porcentajes que establece el propio Caigg? Que esto afecta al PMG de auditoría interna, lo que significa que, en caso de caerse el sistema de auditoría interna produce la caída de los PMG, produce una pérdida de incentivos de remuneraciones a los funcionarios. En su momento, planteamos al Caigg que nos parecía injusto y altamente complicado para las unidades de auditoría que se les midiera su PMG, respecto de recomendaciones en que no teníamos certeza que pudieran ser acogidas por los señores directores. Por lo tanto, no era un tema imputable específicamente a la auditoría.

El gran logro de Gendarmería, desde 2000 a 2007, fue, primero, profesionalizar la unidad de auditoría. Cuando asumí había solamente técnicos y

administrativos, hoy el 80 ó 90 por ciento de los funcionarios son profesionales; logramos que la autoridad dictara resoluciones en virtud de los cuales hacía obligatorios los informes emanados de las regionales; logramos establecer una unidad de auditoría que tiene aproximadamente cuarenta y cinco funcionarios a nivel nacional, dieciséis en Santiago, lo cual es mínimo si contamos con 156 unidades penales, 13 mil funcionarios y un presupuesto de 157 mil millones de pesos. O sea, a todas luces no es lo óptimo, pero hemos avanzado.

Quiero señalar a la Comisión que nuestra labor es solamente informar, a diferencia de la Contraloría que sí tiene la facultad para obligar al servicio a cumplir y a darle plazos de cumplimiento. Es más, se pasó a llamar Unidad de Auditoría Interna, ni siquiera Departamento, porque se entiende, en el contexto de las auditorías del servicio público, que es un ente asesor del director nacional, no un ente contralor propiamente tal. Entonces, es asumido por algunos directores como un ente asesor.

En mi calidad de ex auditor, no veo la auditoría como una asesoría, sino como un ente contralor y estamos solicitando medidas a fin de regularizar situaciones que pudieran ser engorrosas.

Esa es la respuesta en cuanto a auditoría. Qué posibilidades teníamos de solucionar los problemas que detectábamos.

Ahora bien, efectivamente señalé que no era una ilegalidad, pero ante la misma pregunta que me formuló el señor Presidente, respecto de si estaba en el contrato, señalé que sí, que era contractual y que habíamos solicitado que no se cursaran los pagos de las personas que no presentaban sus informes.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.

El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, me gustaría saber si se ejecutaron esos pagos.

El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, creo que no, dado que se ejecutaron en la medida en que se cumplió con los requerimientos. Insisto, sin perjuicio de que lo pida o no la Comisión, voy a hacer llegar el set completo de todas las auditorías que se han hecho de seguimiento de remuneraciones, con el objeto de que las tengan a su disposición y vean el avance. Por ejemplo, durante este año, en el último informe de asesoría de seguimiento que se refiere a las auditorías de 2006 y el primer semestre de 2007, detectamos que el cumplimiento estaba muy bajo. Esto se produce tanto en la Dirección Nacional como en las auditorías que se han hecho en regiones. En mi calidad de director nacional di instrucciones a cada uno de los directores regionales y jefes de departamentos, en el sentido de que tenían que cumplir entre 90 y ciento por ciento de las remuneraciones.

Ahora bien, en cuanto a ser evaluados negativamente en el sistema de gestión, la nueva Dirección ha planteado que la evaluación de las jefaturas y de los directores regionales de cada una de las regiones, amén de que se haga a través del normal sistema de evaluación de administración pública, evalúe cómo ejecutan la gestión y dentro de uno de los requerimientos de gestión es que se acojan los requerimientos de las auditorías y se cumplan a efectos de ser evaluados desde otra perspectiva.

Respecto de los pagos, en la medida de que no se hubiesen ejecutado los servicios, no es por que sea parte de la investigación, ya que a cualquiera persona le llama

la atención el hecho de que se realicen pagos, que si bien es cierto no son ilegales, sin objeto ni causa, es algo evidente. Insisto, de acuerdo con las recomendaciones hechas por la unidad de auditoría y a los informes que se llevaron a cabo posterior a las recomendaciones, esos elementos se habían subsanado. Es cierto que señalamos que no fueron habidos, pero en el cuerpo del informe siempre se señaló que esta auditoría no encontró los informes, ya que nunca se pretendió decir taxativamente que estos informes no existían y, por lo mismo, se les dio plazo a las unidades correspondientes para que los informes fueran acompañados.

Desconozco si algún diputado es auditor y, aunque soy abogado, he dedicado mi vida a la auditoría y gestión, y cuando uno concurre a las unidades auditadas – cabe señalar que concurrí al 90 por ciento de las unidades a nivel nacional- no necesariamente la información es expedita al momento de la visita y, como tenemos tiempo, se chequea y el funcionario firma el documento que dice que no fue habida la información y que la acompañe en un tiempo prudente o subsane los antecedentes. En general, de acuerdo con los informes de seguimiento se ha ido dando.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente, creo que en el tema de los informes trimestrales presumo que es fácil y sencillo acceder a ellos, porque la obligación de entregarlos, de acuerdo con la cláusula sexta de los contratos a los que hemos tenido acceso, se cumple cuando uno se lo entrega al director nacional. Entonces, están en la oficina del director nacional o en el archivador de la secretaria o en el computador de uno de los dos, pero lo que presumo es que no están en un lugar de muy difícil acceso.

Por otra parte, faltó responder la pregunta respecto del sumario.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Alejandro Jiménez.

El señor JIMÉNEZ.- Efectivamente, a simple vista puede parecer de fácil acceso. Pero el tema es que en muchas oportunidades yo acompañaba a los grupos de auditoría, pero no a todas. Por lo tanto, presumo que muchas veces no fueron habidas y acompañadas en el tiempo en que se requería.

Otro tema que hay que tener presente cuando se hace una auditoría es que tenemos plazos, que es una espada de Damocles que uno tiene como auditor.

Todos los requerimientos que hace el Caigg los hace de acuerdo al PMG.

A fin de año debe hacerse un levantamiento de riesgos, sumado a los riesgos del servicio.

A partir de ese levantamiento de riesgos, se califica cuáles son las medidas menos riesgosas y en base a eso uno le paga su programa anual y uno trianual que va modificando.

Pero en ese programa hay que establecer, además, fechas y períodos en que se hace la auditoría y cuándo debe ser enviada al Caigg.

En el caso de que nos atrasemos, y esto es sumamente formal, ya nos pasó en Gendarmería que estuvimos sufriendo bastante para aprobar el último PMG, con auditoría, el Caigg entiende que no se cumplió el PMG en su integridad. Entonces, es una cuestión muy complicada.

¿Qué sucede? Frente a esa situación del tiempo, lo que se hace es que no habido ni acompañado el informe, procedemos y dejamos constancia en él de que no fue habida la documentación que se buscaba y se acompaña al Caigg. Posteriormente, a través de las recomendaciones vamos tratando de subsanar el tema.

Respecto del sumario hay un tema de criterio. En el momento en que se produjo este hecho yo era director y estimé que el daño que se estaba produciendo, si bien no era patrimonial para el Estado, lo era para el servicio. Lo había puesto en una situación incómoda y parecía que, efectivamente, pudiese haberse pagado esos sueldos. El sumario lo que buscó fue acreditar que no se hubiesen pagado las remuneraciones y quedar claros que no había un detrimento para el Fisco.

Personalmente, creo que a Gendarmería se le ha vilipendiado y tratado muy mal en la prensa. Generalmente, está apareciendo por todas sus fallas, que tratamos dentro de lo humanamente posible de subsanar. Pero estimé que, si bien no había daño patrimonial, sí dañaba a la institución.

Llevo siete años en Gendarmería y es un servicio que uno tiende a querer. He señalado que es uno de esos amores que se adquieren y nunca se olvidan. No era suficiente salir a la prensa a señalar que se había revisado todo, sino que había que ser bien transparente, ver dónde estaba el error y determinar quiénes eran los culpables y si había, además, un detrimento patrimonial.

Además, yo pretendía incorporar eficiencia y eficacia en el servicio y esto era una demostración más bien de bastante eficiencia.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).— Quiero expresar que no tenía un juicio tan negativo del valor de la auditoría interna hasta que usted le ha quitado todo valor y la ha relativizado al punto de decir que es un mero informe que tiene importancia si es que el director así lo estima.

Quiero decir que el trabajo que usted ha hecho en los años en que fue director al final queda en los papeles con la importancia que le asigna el destinatario. Yo tenía la impresión de que no era así.

Ése es un comentario que le quería hacer presente, a partir de la relativización del valor que le ha asignado usted a los propios informes que ha evacuado.

El ex ministro Solís dijo que él supervisaba personalmente los contratos, particularmente para verificar que hubiese coherencia entre lo que se estaba contratando y lo que se pagaba. Incluso señaló que había rechazado algunos contratos por cuanto le parecían excesivos los montos de honorarios pactados.

Él expuso varios antecedentes que usted debe conocer. Ha trabajado siete años en Gendarmería y hay gente que sin tener título profesional tenía ingresos bastante elevados. Incluso, existe el caso de alguien que tenía un contrato desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, un egresado de derecho, por casi nueve millones de pesos, en cinco o seis meses.

En las organizaciones gremiales de Gendarmería, al menos tres de aquellas, en la primera audiencia, sostuvieron un mismo concepto: que Gendarmería servía para pagar favores políticos.

¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué nos puede decir sobre la relación entre títulos profesionales, contratos a honorarios, función encomendada y monto de los honorarios pagados por esos contratos, particularmente, porque en el año 2006 se repiten – aquí tengo el cuadro- varias situaciones similares?

Por ejemplo, hay un asesor jurídico que entre el 27 de julio al 31 de diciembre percibió 2.300.000 mil pesos; un egresado de derecho que entre el 24 de julio y el 31 de diciembre percibió 3.500.000 mil pesos, etcétera. Ya vimos el caso de la secretaria ejecutiva asignada al gabinete del ministro; también el de un señor que declara ser consultor y que recibe un millón de pesos; otro egresado de derecho entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre, en fin, podría seguir enumerando gente, que no presenta título, y hacer una relación simple, intuitiva, por decirlo de alguna manera, entre la finalidad para la cual fueron contratados, sus calificaciones profesionales y el monto de honorarios comprometido.

Está por cumplirse el tiempo para el cual fue citada la Comisión.

¿Habría acuerdo para prorrogarlo por 10 minutos?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.

El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, pensé que nos íbamos a encontrar con una situación distinta. Por lo que he escuchado decir al señor Jiménez, esta política de Gendarmería de contratar personas destinadas a otras reparticiones públicas no ha terminado, por ejemplo, el de las secretarías que prestan servicios en otras reparticiones. O sea, de acuerdo con lo que él ha dicho, esta política de pagar por Gendarmería a personas que trabajan en otras instituciones se ha mantenido. Entiendo que no son muchos. Por eso, por una parte, quiero que especifique cuántas son las personas contratadas por Gendarmería que prestan servicios en otras reparticiones públicas y, por otra, que especifique en cuáles.

Además, para aprovechar la buena disposición del director de Gendarmería, le pido, por su intermedio, señor Presidente, que nos haga llegar los contratos de estas personas, de modo de determinar si trabajan a honorarios, a contrata o si son funcionarios de planta.

Asimismo, pido que nos haga llegar los informes trimestrales de los trabajos realizados por esas personas.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para solicitar dicha información?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.

El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, sólo a propósito de su pregunta, pues no quiero que quede la impresión de que las obligaciones contractuales no tienen un carácter legal. Aquí se ha hecho una definición que, creo, es semántica.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Alejandro Jiménez.

El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, entiendo que quede esa sensación de relativización de la actuación de Auditoría, pero quiero decir que no la relativizo. Por el

contrario, creo que es de suma importancia en cualquier servicio tener una unidad de auditoría técnicamente profesional e independiente. Es un tema de cada director.

Yo creo que la unidad de auditoría es fundamental en la labor del director nacional, sobre todo en un servicio que tiene 13 mil funcionarios y, aproximadamente, 156 unidades penales y más de 155 mil millones de pesos en presupuesto.

He dicho que aquí hay un problema legal y de entendimiento de lo que es la auditoría. Es un tema que sobrepasa a cualquier jefe de auditoría de servicio e, incluso, a los directores nacionales. Porque ahí hay un aspecto legal en cuanto a dar importancia a las unidades de auditoría y a cómo éstas se relacionan con la Contraloría.

Creo que eso ayudaría bastante a que las unidades fueran más eficientes o más tomadas en cuenta.

Para mí, la unidad de Auditoría es esencial. A través de ella uno puede ir monitoreando las situaciones.

Debemos entender que durante los últimos cinco años la unidad de Auditoría de Gendarmería de Chile no sólo se dedicó a estos asuntos. Además, ampliamos nuestro espectro y empezamos a revisar desde el estado del armamento hasta la última compra de zanahoria que se hacía en el servicio. Ello, en forma por cierto aleatoria. Pero se hacían revisiones completas.

El problema radica también en que no hay dentro de la ley un requerimiento sobre el tipo de personal de las unidades de auditoría: si los funcionarios deben ser profesionales, técnicos, administrativos y con qué grados. Obviamente, sobre todo en la estructura de Gendarmería, que es bastante militarizada -su estructura es más bien jerárquica-, entre un funcionario grado 12 y uno 10 ó 6 hay una situación bien engorrosa.

Pero no quiero que esto suene a que estoy relativizando la importancia de las unidades de Auditoría. Creo que al funcionamiento de ellas, por el marco regulatorio existente, no se le da la importancia que debería tener. Es un punto que he discutido en forma bastante permanente con el Ministerio, con el Caigg y con la Contraloría, que son las entidades que más cerca podríamos tener a efectos de buscar una solución a dicho problema.

Efectivamente, cuando este director asume, se encuentra con ciertos contratos que, a su juicio -y ya los había detectado en su momento-, parecían excesivos en cuanto a los montos, cosa que se ha intentado regularizar en esta etapa.

Si uno hace una revisión -no quiero decir exhaustiva- es factible que una de las personas en comento aparezca contratada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre por la suma de dos millones de pesos, por poner una cifra. Pero si revisa más atrás, ve que ella tiene cambio del contrato de honorarios a partir de que este director asume, en que se le baja proporcionalmente la remuneración.

Conversé con cada una de esas personas, muchas de las cuales fueron redestinadas -porque dentro de Gendarmería tenemos una falta significativa de gente- al área de personal, a la de asistencia social, incluso, a las unidades penales, en calidad de asistentes sociales. Y les señalé que la única opción que veíamos -porque además se nos iba a presentar un problema presupuestario- era que, o dejaban el cargo o aceptaban una rebaja sustancial en sus remuneraciones. Cada una evaluó su situación, y en muchos casos se

aceptó una rebaja. Pero este director no ha hecho contrataciones, salvo que se justifiquen de acuerdo con los requerimientos técnicos y profesionales existentes y siempre que se cumplan las exigencias del caso.

Por lo tanto, me hago cargo de lo concerniente a los montos y al descriterio, si usted quiere, o a la forma de cómo fueron determinados desde mi asunción como director, en que he tratado de regularizar la situación.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- ¿Podría precisar? ¿Usted estima que efectivamente había contratos con montos elevados?

El señor JIMÉNEZ.- Ahí es cosa de criterio. La verdad es que, a mi criterio absolutamente personal, ni siquiera como director sino como Alejandro Jiménez, en los casos de alguna gente podría ser.

Con eso no quiero señalar que es ilegal. Se trata de un criterio que ocupa cada director nacional, no sólo de este servicio sino de cualesquiera otros, al contratar funcionarios.

Insisto: yo, como Alejandro Jiménez, abogado y además director, estimo que la labor encomendada, debido a su perfil, merecía o merece equis remuneración. Pero con eso no estoy señalando que sea justo o no. Incluso, puedo estar equivocado, porque una persona, por estimar que su trabajo valía más que lo que yo le estaba ofreciendo, podría haberse ido. O sea, quiero dejar en claro que ésta es una cuestión absolutamente personal. Y lo que he entregado es mi visión.

Ahora, se consulta también si hay favores políticos. Yo diría que la relación con las asociaciones ha sido, en general, bastante conflictiva durante el tiempo que llevo en Gendarmería, y presumo que desde antes.

No creo que haya habido favores políticos en Gendarmería de Chile. Creo que las contrataciones que se hicieron –debo ser muy honesto- estaban dentro de los requerimientos que se exigían en su momento. Era un momento en que las contrataciones impactarían profundamente en Gendarmería, cuando se produce la Reforma Procesal Penal. Se hicieron un sinnúmero de estudios que decían relación con la cantidad de traslados y de personal que debía tener Gendarmería, como también con el aumento que eso iba a significar, puesto que el número de internos que hoy atiende la institución se ha incrementado de manera explosiva. Hoy atendemos a 44 mil internos que están privados de libertad. Entonces, si hacemos el cálculo de las personas internas, sean repetidas o no, ocurre algo similar a lo de Metro. No se trata de que hoy anden 15 millones de chilenos por ese medio, sino que me refiero a la reiteración de cada viaje. Actualmente, atendemos a más de 155 mil personas que en algún momento pasan por Gendarmería, sea durante mediodía o una hora, lo cual echa a andar todo el sistema de la institución.

Por lo tanto, creo que en su momento fueron necesarios, pero no hay favores políticos. De lo que sí puedo dar certeza –insisto- es que en el período en que estuve a cargo de la institución las personas fueron contratadas porque había un requerimiento técnico, posteriormente evaluamos sus prestaciones y servicios bajo cierto criterio de que se estaban pagando los trabajos que se realizaban efectivamente. Por ejemplo, respecto de una remuneración de poco más de 3 millones de pesos a que se refirió un señor diputado, eso ocurrió cuando echamos a andar el sistema de concesiones. En ese caso, se trataba de un especialista que no era posible contratar de acuerdo con su valor de mercado, y debemos

entenderlo. Desafortunadamente, el servicio público no permite –en algunos casos es bueno- cierta elasticidad en esta materia. Por eso, en casos en que se requieren personas especializadas en algunos temas, como en las concesiones o la seguridad, el mercado nos indica una cierta cantidad de dinero. Pero, si no somos capaces de pagar esos montos, obviamente nos quedaremos sin especialistas en determinadas áreas. Sin duda, las concesiones eran algo nuevo y en lo que había que hacer un trabajo profundo respecto de lo que significaba todo el sistema. Insisto, he tratado de hacer las contrataciones de acuerdo con lo que el criterio indica que es mejor para el servicio.

Ahora bien, en cuanto a las personas que se encuentran en otras reparticiones, no tengo el número exacto de ellas. Sin embargo, están de planta y a contrata y, en muchos casos, han sido solicitadas por seis meses, dadas las posibilidades que establece el propio estatuto de destinación. Por ejemplo, dentro de esos funcionarios tenemos, además de profesionales y técnicos, funcionarios de fila de Gendarmería que custodian los tribunales de Justicia y el Ministerio de Justicia.

En ese sentido, me comprometo a elaborar un informe acerca de la cantidad exacta de personas que están en Gendarmería, cuál es su situación jurídica con el servicio y en qué reparticiones públicas se encuentran. Estamos en proceso de disminuir al mínimo esos requerimientos, porque tenemos problemas de personal.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- ¿Alguna otra cosa?

En nombre de la Comisión, le agradezco su asistencia y colaboración, y quedamos en espera de los documentos que se ha comprometido a enviar.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 13.12 horas.

CLAUDIO GUZMÁN AHUMADA,
Jefe de Taquígrafos de Comisiones.